RAZÓN DE CUENTA.- En Tepeaca, Puebla, a trece de enero del año dos mil veinte, con fundamento en el artículo 47 Fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, DOY CUENTA al Ciudadano Juez con los autos del expediente número 129/2019, a fin de dictar la resolución que en derecho corresponda. CONSTE.

C. SECRETARIA

LIC. MARÍA EUGENIA DEL ROSARIO RAMÍREZ VILLEGAS

SENTENCIA DEFINITIVA. EXP. NÚM. 129/2019.-Tepeaca de Negrete, Puebla, a trece de enero del año dos mil veinte.

VISTOS los presentes autos para dictar sentencia definitiva dentro del expediente número 129/2019, relativo al **JUICIO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA Y OTORGAMIENTO EN ESCRITURA PÚBLICA ANTE NOTARIO PÚBLICO, ENTREGA FÍSICA Y MATERIAL DEL BIEN INMUEBLE**, promovido por *****, en contra de *****; la parte actora designó como abogado patrono a *****, en tanto que la parte demandada a *****; con domicilio para recibir notificaciones personales que de la causa constan, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. En primer término, es de puntualizarse que existe una causal, que impide al suscrito en representación de la potestad judicial de nuestro estado, defina mediante sentencia, la controversia planteada, esto a virtud de que la actora ***** reclamó la entrega del predio ubicado *****, Municipio de Amozoc de Mota, Puebla, de las siguientes medidas y colindancias: AL SUR, ***** metros con ***** y *****; AL NORTE, ***** metros con *****; AL ESTE, ***** metros, ***** centímetros con *****; y AL OESTE, ***** metros, ***** centímetros con *****; así como el Otorgamiento de Escritura Pública a favor de sí y del fallecido *****, en relación con el citado inmueble; pues del contrato de compraventa privado que acompaño se advierte que el inmueble materia de la operación contractual pertenece al régimen ejidal, considerando que el título presentado por la demandada ***** para demostrar la titularidad del predio que enajenó corresponde a un certificado de derechos agrarios, por ende, ésta Autoridad judicial carece de competencia para conocer de tal acción, de conformidad con lo que disponen los artículos 99 fracción I,

100, 106 y 107 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, ello impide resolver el fondo de la presente acción, pues la competencia es un presupuesto procesal que como requisito permite la constitución y desarrollo del juicio, y sin el cual no puede iniciarse ni tramitarse con eficacia jurídica éste, por lo que debe existir desde que se inicia y subsistir durante él, estando facultada esta autoridad para estudiarla de oficio tratándose de aquella competencia por razón de materia, pues es improrrogable y, por consiguiente, no puede inferirse sumisión tácita o expresa por las partes. Siendo aplicable al caso, la tesis jurisprudencial sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis número 1a./J. 6/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 334, Libro VII, Abril de 2012, Tomo 1, Registro número 2000517, Décima Época, bajo el rubro: *“COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA MATERIA. EL JUEZ DEL CONOCIMIENTO PUEDE EXAMINARLA DE OFICIO EN EL PRIMER PROVEÍDO QUE EMITA RESPECTO DE LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, O BIEN, DURANTE EL PROCEDIMIENTO, E INCLUSO, AL DICTAR LA SENTENCIA CORRESPONDIENTE”*.

En efecto, la competencia tiene como objetivo determinar cuál va a ser el tribunal que va a conocer, con preferencia o exclusión de los demás, de una controversia que ha puesto en movimiento la actividad jurisdiccional, en esa virtud, si jurisdicción es la facultad de administrar justicia, la competencia fija los límites dentro de los cuales se ejerce tal facultad; ésta puede ser determinada por la materia, la cuantía, el grado y territorio; la primera de ellas, es la naturaleza jurídica del conflicto objeto del litigio, en el que encontramos órganos que conocen de materia civil, familiar, penal, constitucional, administrativa, laboral, agraria y fiscal; por territorio el lugar físico donde se encuentran los sujetos u objeto de la controversia o donde se produjo el hecho que motiva el juicio, es decir, el ángulo de distribución territorial de la competencia entre los diversos órganos judiciales; otros principios jurídico-políticos influyen sobre la división territorial de la competencia, el caso específico de nuestro país, donde existe una organización constitucional que establece autoridades y normas de carácter federal y estatal, así como la creación, en algunos sectores como el fiscal, el electoral y el agrario; la cuantía el valor económico que pueden revestir los negocios judiciales; y el grado que se refiere a la instancia o grado jurisdiccional atendida la estructura jerárquica de los sistemas judiciales, en que puede ser conocido un asunto. Puede ser en única, primera o segunda instancia.

Así, la competencia jurisdiccional consiste en la capacidad que tiene un órgano jurisdiccional para conocer y fallar sobre un asunto con exclusión de los

demás órganos similares que con él integran un mismo fuero judicial –tribunales comunes, tribunales especiales-; en esa virtud, ésta nace o se genera de las disposiciones jurídicas orgánicas de los tribunales y se surte de acuerdo con las circunstancias de materia, de lugar, de grado o de cuantía que rodeen al litigio planteado.

Luego entonces, la función jurisdiccional es una potestad atribuida a determinados órganos para dar solución a las cuestiones litigiosas de los gobernados pero, al mismo tiempo, es un deber impuesto a esos órganos debido a lo cual éstos no tienen la posibilidad de negarse a ejercerla.

Por ende, la autoridad jurisdiccional como tal no puede hacer más de lo que la ley expresamente le confiere, por lo que deben hacerse uso de los mecanismos jurídicos establecidos por el legislador para el ejercicio de su función; y los gobernados deben acatar esos mecanismos al momento de pretender ejercer su derecho a la jurisdicción.

Con base en lo expuesto, se determina que esta controversia debe ser del conocimiento de los Tribunales Unitarios Agrarios, en términos de los artículos 27, fracción XIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 18, fracción V de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, pues a cada tribunal se le asigna una especialización y a cada uno de ellos les corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad, en este caso, a los tribunales agrarios el conocer sobre asuntos relacionados con la tenencia de tierras ejidales, por tanto, atendiendo al análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados y del contrato privado de compraventa que exhibió la demandante, en el que se prescinde del estudio de la relación jurídica sustancial que vincula a los contendientes, el conflicto versa sobre cuestiones de carácter ejidal, pues en el apartado de declaraciones del citado contractus se advierte que la enajenante (hoy demandada) refirió que el predio en cuestión tenía como antecedente un Certificado de Derechos Agrarios, por lo que su tramitación y substanciación debe verificarse ante los tribunales agrarios establecidos, dado que la pretensión de la accionante consiste en que se decrete por sentencia, el otorgamiento de escritura pública, así como la restitución de un predio sujeto a régimen ejidal, lo que sólo puede ser dilucidado ante dichos tribunales, por así disponerlo los artículos 9, 10 y 82 de la Ley Agraria. Siendo aplicable en lo conducente, la tesis jurisprudencial emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 2a./J. 5/99, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en la página 170, Tomo IX, Febrero de 1999, Novena Época, bajo el rubro: *“SOLAR URBANO NO TITULADO, EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO, ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS*

POR SU TENENCIA”.

Por ende, ante la incompetencia de ésta Autoridad Judicial de resolver la presente controversia, al no ser jurisdicción de la misma y si de los Tribunales Agrarios correspondientes, no es de resolver el fondo del presente Juicio, conforme lo indica el diverso 114 del Código Procesal Civil, en esa virtud se declara la improcedencia de la acción intentada por *****, quedando a salvo sus derechos para que los ejercite ante la autoridad competente. Tiene sustento lo que indica el artículo 113 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 47, 48 y 50 del Código Procesal de la Materia, es de resolverse y se:

R E S U E L V E

ÚNICO.- Esta autoridad Judicial es incompetente para conocer de la acción de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA Y OTORGAMIENTO EN ESCRITURA PÚBLICA ANTE NOTARIO PÚBLICO, ENTREGA FÍSICA Y MATERIAL DEL BIEN INMUEBLE, intentada por *****, por las razones contenidas en el cuerpo de la presente resolución se declara improcedente la acción intentada, quedando a salvo sus derechos para que los ejercite, ante la autoridad competente.

Así lo Sentencia y firma el Ciudadano Licenciado FELIPE DE JESÚS VENTURA HERNÁNDEZ, Juez de lo Civil de éste Distrito Judicial, ante la Ciudadana Licenciada MARÍA EUGENIA DEL ROSARIO RAMÍREZ VILLEGAS, Secretaria de Acuerdos Impar con quien actúa. DOY FE.